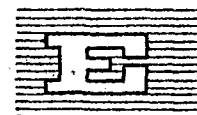


NACIONES UNIDAS

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1190
16 de enero de 1976

ESPAÑOL
Original: INGLES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
32º período de sesiones
Tema 7 del programa provisional

ULTERIOR PROMOCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES,
INCLUIDA LA CUESTION DEL PROGRAMA DE TRABAJO A LARGO PLAZO DE LA COMISION

Discusiones y recomendaciones del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente acerca de los diversos aspectos de los derechos humanos, con particular referencia a la resolución 3218 (XXIX) de la Asamblea General, así como a las decisiones de la Asamblea General sobre esta cuestión

Informe preparado por el Secretario General de conformidad con el inciso b) del párrafo 3 de la resolución 10 (XXXI) de la Comisión

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION	1 - 9	1
I. DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL QUINTO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS ACERCA DE LOS DIVERSOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS, CON PARTICULAR REFERENCIA A LA RESOLUCION 3218 (XXIX) DE LA ASAMBLEA GENERAL	10 - 42	4
A. Discusiones y recomendaciones del Congreso acerca de la formulación de normas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	12 - 25	4
B. Discusiones y recomendaciones del Congreso acerca de la preparación de un código internacional de ética para la policía y organismos conexos encargados de hacer cumplir la ley	26 - 31	8
C. Algunos otros aspectos de la labor del Congreso que parecen estar estrechamente relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos .	32 - 42	11
1. Cambios en las formas y dimensiones de la delincuencia transnacional y nacional	32	11

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
2. Legislación penal, procedimientos judiciales y otras formas de control social en la prevención del delito	33 - 35	12
3. Nuevas funciones de la policía y otros organismos de aplicación de la ley, con especial referencia a las cambiantes expectativas y a niveles mínimos de ejecución	36	13
4. El tratamiento del delincuente bajo custodia o en la comunidad, con especial referencia a la aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por las Naciones Unidas	37 - 39	13
5. Propuestas relativas a los procedimientos para la aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y participación de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión en esos procedimientos	40 - 42	14
II. DISCUSIONES Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EN SU TRIGESIMO PERIODO DE SESIONES EN RELACION CON EL TEMA "TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES EN RELACION CON LA DETENCION Y EL ENCARCELAMIENTO"	43 - 63	16
A. Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	47 - 58	17
B. Discusiones y decisiones de la Asamblea General sobre la cuestión de un Código Internacional de Etica de la Policía y organismos conexos de aplicación de la ley	59 - 63	20

Anexos

- I. Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- II. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación con la detención y el encarcelamiento

INTRODUCCION

1. Este informe se presenta de conformidad con el inciso b) del párrafo 3, de la resolución 10 (XXXI) de la Comisión, en el cual ésta pedía al Secretario General que, teniendo en cuenta la necesidad de establecer un programa de trabajo unificado a largo plazo en materia de derechos humanos, le presentara en su 32º período de sesiones, entre otras cosas, un informe sobre "las discusiones y recomendaciones del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente acerca de los diversos aspectos de los derechos humanos, con particular referencia a la resolución 3218 (XXIX) de la Asamblea General, así como a las decisiones de la Asamblea General sobre esta cuestión".

2. La preocupación que las Naciones Unidas vienen expresando desde hace muchos años por proteger a las personas sometidas a cualquier tipo de detención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ha intensificado considerablemente desde 1973. En septiembre de ese año, durante su 26º período de sesiones, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías pidió a la Comisión de Derechos Humanos que la autorizara para incluir en el programa de su próximo período de sesiones un tema titulado "Cuestión del respeto de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención" 1/.

3. En su resolución 3059 (XXVIII), de 2 de noviembre de 1973, la Asamblea General, teniendo presente lo que la Subcomisión había pedido, pidió a su vez al Secretario General que informara a la Asamblea General, en el contexto del informe del Consejo Económico y Social, de la consideración que pudieran haber prestado a esta cuestión la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías o la Comisión de Derechos Humanos y otros órganos interesados. La Asamblea General decidió además examinar la cuestión de las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación con la detención y la reclusión como tema separado en un período de sesiones ulterior.

4. En 1974, una vez recibida la autorización de la Comisión de Derechos Humanos 2/, la Subcomisión examinó este asunto en su 27º período de sesiones, celebrado en 1974, y por la resolución 7 (XXVII), de 20 de agosto de 1974, decidió examinar anualmente la situación de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención, tomando en consideración cualquier información fidedigna que le suministraran los gobiernos, los organismos especializados, las organizaciones intergubernamentales regionales y las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social interesadas, siempre y cuando estas organizaciones no gubernamentales obraran de buena fe y su información no respondiera a motivos políticos contrarios a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

1/ E/CN.4/1128, parte B, sección b), decisión 1 i).

2/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 56º período de sesiones, Suplemento Nº 5, E/5464, cap. XIX.B.6.

5. La Asamblea General, en su resolución 3218 (XXIX), de 6 de noviembre de 1974, tomando nota con reconocimiento de la decisión de la Subcomisión y recordando, entre otras cosas, la resolución 663 C (XXIV) del Consejo Económico y Social, en la que éste aprobó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y la resolución 1794 (LVI) del Consejo Económico y Social sobre la preparación de un código internacional de ética policial, así como la resolución 3144 (XXVIII) de la Asamblea General sobre los derechos humanos en la administración de justicia, expresó su convicción de que, a causa del aumento del número de informes alarmantes sobre torturas, se necesitaban nuevos y sostenidos esfuerzos para proteger en todas las circunstancias el derecho humano básico a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Asamblea decidió volver a examinar la cuestión en su trigésimo período de sesiones. En el párrafo 2 de la resolución, se pedía al Secretario General que preparara un compendio analítico de la información que se solicita a los Estados Miembros acerca de las medidas legislativas, administrativas y judiciales, incluso recursos y sanciones, destinadas a proteger a las personas dentro de sus jurisdicciones para que no fueran sometidas a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y de sus observaciones y comentarios sobre los artículos 24 a 27 del proyecto de principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso, preparado para la Comisión de Derechos Humanos 3/. Este compendio analítico debía presentarse a la Asamblea General en su trigésimo período de sesiones, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Subcomisión, y al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Específicamente, en los párrafos 3 y 4 de la resolución, se pidió al Congreso que estudiara la cuestión de la preparación de un código internacional de ética para la policía y organismos conexos encargados de hacer cumplir la ley y además que, en la elaboración de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, incorporase normas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Asamblea General invitó también a la Organización Mundial de la Salud a que redactara, en estrecha colaboración con otras organizaciones competentes, un bosquejo de los principios de ética médica que fueran pertinentes a la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y señalara el proyecto a la atención del Quinto Congreso.

6. En su resolución 4 (XXVIII), de 10 de septiembre de 1975, la Subcomisión tras realizar su primer examen anual de la información relativa a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención, destacó en general varias cuestiones que, a su juicio, requerían atención inmediata. La Subcomisión también invitó a la Comisión de Derechos Humanos a que examinara urgentemente el Estudio sobre el derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado y el proyecto de principios que figuraba en dicho estudio. Volvió a pedir al Secretario General que presentara a la Subcomisión en su próximo período de sesiones información debidamente comprobada recibida de los gobiernos, los

3/ Véase el Estudio del derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: 65.XIV.2) parte VI. Este estudio se preparó de conformidad con la resolución 624 B (XXII) del Consejo Económico y Social.

organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales regionales, junto con una sinopsis de los datos recibidos de las organizaciones no gubernamentales, y que facilitara a la Subcomisión un informe sobre los aspectos pertinentes de la labor realizada por el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

7. El Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente se celebró en Ginebra del 1º al 12 de septiembre de 1975. Asistieron expertos designados por los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y miembros de los organismos especializados, representantes de los organismos especializados, de la Organización de Liberación de Palestina, y de movimientos de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana (OUA), de diversas organizaciones intergubernamentales y organizaciones gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, y también particulares idóneos. Participó activamente en las tareas del Congreso la División de Derechos Humanos de la Secretaría de las Naciones Unidas, cuyo Director la transmitió, en particular, la preocupación de la Asamblea General, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión sobre los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención. En el capítulo I del presente informe se analizan las discusiones y recomendaciones del Congreso sobre los dos temas que le encomendara expresamente la Asamblea General por su resolución 3218 (XXIX), y sobre otros aspectos de su labor, estrechamente relacionados con los derechos humanos.

8. En el capítulo II se examinan las discusiones y las decisiones de la Asamblea General durante su trigésimo período de sesiones relativas al tema "Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación con la detención y el encarcelamiento".

9. Las referencias que se hacen en el presente informe a las discusiones y recomendaciones del Congreso y a los debates de la Asamblea General figuran únicamente a título de ejemplos.

I. DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL QUINTO CONGRESO DE LAS
NACIONES UNIDAS ACERCA DE LOS DIVERSOS ASPECTOS DE LOS
DERECHOS HUMANOS, CON PARTICULAR REFERENCIA A LA
RESOLUCION 3218 (XXIX) DE LA ASAMBLEA GENERAL

10. El Quinto Congreso de las Naciones Unidas, dedicado al tema general "Prevención y control del delito -la empresa del último cuarto de siglo", se ocupó del programa siguiente:

- 1) Cambios en las formas y dimensiones de la delincuencia transnacional y nacional
- 2) Legislación penal, procedimientos judiciales y otras formas de control social en la prevención del delito
- 3) Nuevas funciones de la policía y otros organismos de aplicación de la ley, con especial referencia a las cambiantes expectativas y a niveles mínimos de ejecución
- 4) El tratamiento del delincuente, bajo custodia o en la comunidad, con especial referencia a la aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por las Naciones Unidas
- 5) Consecuencias económicas y sociales del delito: nuevos estímulos para la investigación y planificación.

11. La sección A de este capítulo trata de las discusiones y recomendaciones del Congreso relativas a la formulación de proyectos de normas para la protección de las personas sometidas a cualquier tipo de detención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes. La sección B trata de la labor del Congreso relativa a la preparación de un código internacional de ética para la policía y organismos conexos encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con la otra petición formulada por la Asamblea General en su resolución 3218 (XXIX). La sección C se refiere a otra parte del trabajo del Congreso que parece guardar estrecha relación con la protección de los derechos humanos.

A. Discusiones y recomendaciones del Congreso acerca de la formulación de normas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

12. Al examinar esta cuestión, el Congreso tuvo ante sí, además de diversos documentos de trabajo preparados por su secretaría, el texto de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 4/, el proyecto de principios sobre el derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, preparado por la Comisión de Derechos Humanos 5/, el compendio analítico de la información,

4/ Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: 1956.IV.4.

5/ Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: 65.XIV.2, parte VI.

observaciones y comentarios recibidos de los Estados Miembros preparado por el Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 3218 (XXIX) de la Asamblea General 6/ y un documento titulado "Aspectos sanitarios de los maltratos evitables infligidos a presos y detenidos", preparado por la Organización Mundial de la Salud de conformidad con el párrafo 5 de la misma resolución 7/.

13. El informe del Secretario General mencionaba, en particular, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 6, 7, 8 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 8/ y se destacaba que, en virtud del Pacto, los Estados Partes no podían suspender estas disposiciones, ni siquiera en situaciones excepcionales.

14. A fin de responder a la petición formulada por la Asamblea General en el párrafo 4 de su resolución 3218 (XXIX) se llamaba la atención, en primer lugar sobre las propuestas contenidas en un documento de trabajo preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas 9/, de modificar el inciso 1) de la Regla 4 y el inciso 1) de la Regla 84 de las Reglas Mínimas para que éstas fueran aplicables a toda persona privada de su libertad, independientemente de que se hubiesen presentado contra ella cargos penales. El texto de las modificaciones que sugería la Secretaría es el siguiente, con los cambios que se sugieren subrayados:

- "a) 4.1) La primera parte de las Reglas trata de las concernientes a la administración general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por cualquier autoridad."
- "b) 84.1) A los efectos de las disposiciones siguientes, es denominado "acusado" toda persona arrestada, encarcelada o privada de su libertad de cualquier manera y por cualquier razón, que todavía no ha sido juzgada."

15. Para asegurar la protección de las personas sometidas a cualquier tipo de detención contra la tortura, el experto del Canadá propuso que se incorporase el fondo de los artículos 24, 26 y 27 del Proyecto de Principios sobre el Derecho a no ser Arbitrariamente Detenido ni Preso a la parte II de las Reglas, "Reglas aplicables a categorías especiales", como nueva sección E, "Reclusos detenidos y presos" 10/.

6/ Documento A/10158. Este informe se distribuyó al Congreso con la signatura A/CONF.56/8.

7/ A/CONF.56/9.

8/ El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo entrarán en vigor el 23 de marzo de 1976, al haberse cumplido los requisitos relativos al mínimo de ratificaciones o adhesiones (veinticinco para el Pacto y diez para el Protocolo).

9/ A/CONF.56/6. El texto completo de estas sugerencias figura también en el documento A/10260, párr. 10.

10/ A/CONF.56/L.6/Add.1, párr. 13: propuesta del experto del Canadá, el 9 de septiembre de 1975, en la sección IV.

16. A juicio de algunos participantes, las enmiendas presentadas a las Reglas Mínimas y los procedimientos propuestos para su aplicación efectiva, a los que no se planteó objeción alguna durante el debate, debían presentarse a los órganos competentes de las Naciones Unidas 11/.

17. El Congreso creó un grupo oficioso de trabajo para que examinara todos los proyectos y sugerencias que se habían presentado.

18. El debate se centró sobre todo en la "Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", propuesta por los expertos de los Países Bajos y Suecia y revisada por el grupo de trabajo. Los autores presentaron esta declaración como un conjunto de principios generales relativos a la prohibición de la tortura. Pidieron que no se les atribuyera el carácter de normas jurídicas susceptibles de una interpretación estricta a nivel nacional o internacional. Según sus patrocinadores, el proyecto podría considerarse como una Declaración independiente o pasar a formar parte de un código internacional de ética para la policía o de una versión corregida de las Reglas Mínimas Uniformes.

19. Durante los debates, se examinó la declaración propuesta. Se prestó especial atención a la definición de la tortura, que figuraba en el artículo 1 y que decía lo siguiente:

"Se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionadamente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar a esa persona o a otras."

Los partidarios de una definición más restringida propusieron que ésta se limitara a las actuaciones directas de funcionarios públicos. Los participantes partidarios de una definición más amplia propusieron suprimir la palabra "intencionadamente" e insertar, al final del artículo, las palabras "o con cualesquiera otros fines" 12/. Se propuso sustituir la palabra "graves" por "crueles" (u otro adjetivo apropiado) 13/. El Congreso no aceptó ninguna de las enmiendas, pero éstas se mantuvieron en forma de reservas que se transmitieron a la Asamblea General junto con el texto aprobado del proyecto de declaración. Sin embargo, el Congreso agregó a la redacción inicial del artículo 1 la siguiente cláusula aclaratoria: "No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos".

11/ A/10260, párr. 14.

12/ Ibid., párr. 16.

13/ Ibid.

20. En cuanto al artículo 10, que trata de las sanciones contra personas acusadas de haber cometido actos de tortura, se propuso; pero no se aceptó, que se ampliara el alcance de la disposición insertándose, a fin de tener en cuenta también los procedimientos "disciplinarios, u otros procedimientos adecuados" 14/. También suscitó debate el artículo 12, según el cual una declaración hecha como resultado de tortura u otros malos tratos no podía ser invocada como prueba. El Congreso aceptó la propuesta de que una declaración de esa índole no pudiera ser invocada como prueba no sólo contra la víctima, sino tampoco contra la persona involucrada en ningún procedimiento.

21. El Congreso no aceptó la sugerencia de suprimir en el artículo 3 la cláusula por la que se reafirma que no podrán invocarse circunstancias excepcionales como justificación de la tortura y los malos tratos 15/.

22. Durante los debates sobre el significado y las limitaciones del concepto de "tortura", incluida la tortura mental, y sobre las cuestiones relativas a la complejidad que suscita el artículo 7, se aludió a la labor de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones, entre ellas la Asociación Médica Mundial, sobre la deontología pertinente.

23. Hubo un amplio debate en torno al artículo 13 del texto inicialmente propuesto por los Países Bajos y Suecia, en el cual se decía que todos los Estados debían poner en vigor la Declaración lo antes posible y se pedía a todas las organizaciones gubernamentales internacionales competentes que cooperaran en la aplicación de las normas de conformidad con el derecho y los usos internacionales. Aunque algunos participantes apoyaban la inserción de ese artículo, otros opinaron que éste debía suprimirse por no ser procedente en una Declaración como la prevista 16/. El artículo 13 no se incluyó en el proyecto presentado por el Congreso a la Asamblea General.

24. El Congreso aprobó por aclamación el texto del proyecto de declaración con las modificaciones introducidas, y recomendó a la Asamblea General que lo aprobara 17/.

25. Al terminar sus debates sobre este tema, el Congreso concluyó que las prácticas de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes repugnaban a la colectividad de las naciones. Se reconoció que la Declaración sólo representaba un primer paso para asegurar la protección más efectiva de todo ser humano contra estas prácticas. En última instancia el objetivo sería aprobar una convención internacional sobre esta cuestión que gozara de la aceptación universal 18/.

14/ Ibid.

15/ A/CONF.56/L.6/Add.1, párr. 11.

16/ Ibid., párr. 12.

17/ A/10260, párr. 15.

18/ A/CONF.56/L.6/Add.1, párr. 15.

B. Discusiones y recomendaciones del Congreso acerca de la preparación de un código internacional de ética para la policía y organismos conexos encargados de hacer cumplir la ley

26. Como se recordará, este tema figuraba en el programa del 20º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, conforme a la sugerencia formulada por un Seminario de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en la administración de la justicia penal, celebrado en Canberra, Australia, del 30 de abril al 14 de mayo de 1963, en relación con el Programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos ^{19/}. Sin embargo, la Comisión no pudo ocuparse de este tema por falta de tiempo y por haber asignado más prioridad a otros temas de su programa. En su resolución 1794 (LIV), de 18 de mayo de 1973, el Consejo Económico y Social invitó al Comité sobre Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia a que considerara la posibilidad de incluir en su programa de trabajo la cuestión de la preparación de un código internacional de ética policial y a que transmitiera a la Comisión de Derechos Humanos sus recomendaciones sobre la conveniencia, el alcance y el posible contenido de ese código. El Consejo pidió a la Comisión de Derechos Humanos que examinara esa cuestión oportunamente, en un futuro período de sesiones, sobre la base de las recomendaciones del Comité sobre Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia. Como ya se señaló en la introducción al presente informe, la Asamblea General, en el párrafo 3 de su resolución 3218 (XXIX), pidió al Quinto Congreso que prestara urgente atención a esta cuestión, teniendo en cuenta el trabajo pertinente realizado por el Comité sobre Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia en cumplimiento de la resolución 1794 (LIV) del Consejo Económico y Social.

27. En preparación para el Congreso, el Secretario General convocó en enero de 1975 una reunión de un grupo de trabajo de expertos en materias policiales para redactar un proyecto de código internacional de ética para la policía y organismos conexos encargados de hacer cumplir la ley. El grupo de trabajo redactó el siguiente proyecto de código internacional de ética policial, que fue presentado al Congreso:

"Un agente de policía es a la vez un ciudadano y un agente de ejecución de la ley, quien, en nombre de sus conciudadanos, impide el delito, mantiene la paz pública, protege a las personas y los bienes y descubre y aprehende a los delincuentes. La profesión policial tiene por tradición ser útil, aun más allá del cumplimiento del deber, a todas las personas.

- 1) Un agente de policía es un servidor de la ley;
- 2) La honradez en el pensamiento y en las obras debe definir la vida pública y privada de un agente de policía;
- 3) Un agente de policía debe ser imparcial y justo con todos, cualesquiera que sean su posición social, raza o creencia;
- 4) Un agente de policía debe ser incorruptible;

^{19/} Véase el informe del Seminario, ST/TAO/HR.10.

- 5) Un agente de policía debe tener un respeto humanitario por la dignidad de la persona humana, y comportarse con todos con cortesía, auto-dominio, comprensión y tolerancia;
- 6) Un agente de policía no debe recurrir jamás a la fuerza en mayor medida que la necesaria para cumplir un propósito legítimo, ni tampoco ha de someter a nadie a ninguna forma de trato cruel, inhumano o degradante;
- 7) Un agente de policía debe esforzarse continuamente por aumentar su capacidad profesional y, al hacerlo, debe tratar de lograr una comprensión cada vez mayor de la sociedad y de la conducta humana;
- 8) Un agente de policía debe obedecer las órdenes de las autoridades legalmente constituidas y los reglamentos de la organización policial a la que pertenece, a menos que esté legalmente autorizado para no tenerlos en cuenta;
- 9) Los asuntos de carácter confidencial que llegan a conocimiento de un agente de policía deben mantenerse en secreto a menos que el cumplimiento del deber requiera lo contrario;
- 10) La conducta de un agente de policía, en su calidad de ciudadano, debe ser ejemplar." 20/

28. El experto de los Países Bajos presentó otro proyecto, en el cual se hacía hincapié en la prohibición de la tortura. Este documento se presentó como anexo al proyecto del Grupo de Trabajo. Su texto es el siguiente:

"1. La función de la policía es la prestación de un servicio público esencialmente civil creado por el gobierno legalmente constituido y responsable solamente ante él. La policía está obligada por ley a impedir violaciones de la ley, a aprehender y enjuiciar a los que la violan y a mantener el orden y la seguridad públicos con arreglo a la ley. Esta obligación incluye el deber de apoyar y promover los derechos humanos, conforme se describen en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuyos principios deben educarse y formarse de manera adecuada los agentes de policía.

2. Debe aplicarse un código de ética policial a todas las personas y organizaciones, incluidos los servicios secretos, la policía militar, las fuerzas armadas o las milicias que actúen en calidad de policía, y a todas las demás personas dedicadas a hacer cumplir la ley, investigar violaciones, mantener el orden público o preservar la seguridad del Estado.

3. Se prohíben en todas las circunstancias, incluidas las mayores emergencias de conflicto o guerra civil, las ejecuciones sumarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y, en general, todo acto violento contra la integridad física o mental de la persona.

4. Debe establecerse una responsabilidad clara basada en una cadena de mando en virtud de la cual los superiores, civiles y militares, sean personalmente responsables por actos de comisión u omisión relacionados con actos de tortura u otros malos tratos.

20/ Véas el documento A/10260, párr. 3.

5. Los agentes de policía y todas las demás personas comprendidas en este código tienen el derecho de desobedecer o desconocer cualquier orden, instrucción o mandato, aunque esté dado legalmente dentro del contexto de la legislación nacional, que esté en contradicción clara y significativa con derechos humanos básicos y fundamentales, conforme se describen en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tienen el deber de desobedecer o desconocer cualquier orden, instrucción o mandato de ejecutar sumariamente, torturar o infligir lesiones de otra manera a una persona bajo su custodia. Tienen también, cuando hayan cumplido órdenes, instrucciones o mandatos que de otro modo consideren en contradicción clara y significativa con derechos humanos básicos y fundamentales -tales como una detención prolongada sin supervisión judicial efectiva- el deber de protestar contra la emisión de esa orden, instrucción o mandato.

6. La policía y otros funcionarios que detengan a personas deben seguir las instrucciones de los médicos u otro personal médico competente cuando, para preservar la salud de un detenido, el médico o los funcionarios sanitarios lo sometan a cuidados médicos.

7. Las personas comprendidas en este código tienen obligación de informar a los órganos nacionales e internacionales apropiados de las actividades que sean contravención directa de los principios y disposiciones de este código de ética y violación abierta de los derechos humanos, conforme se describen en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En caso necesario, como último recurso, deben hacer pública esa información.

8. Ningún agente ni ninguna otra persona comprendida en este código debe sufrir castigos administrativos o de otra naturaleza como resultado de medidas adoptadas para resistir órdenes, instrucciones o mandatos incompatibles con los principios y disposiciones de este código de ética, o para protestar contra ellos.

9. Teniendo en cuenta el artículo 23 4) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los agentes y otros profesionales o personas comprendidos en las disposiciones de este código y sus organizaciones profesionales, laborales, sindicales o gremiales de otro tipo deben tener el derecho individual y colectivo de ofrecer apoyo a quienes lo necesiten como resultado de su adhesión a los principios y disposiciones del Código.

10. Toda organización, nacional e internacional que adopte, proponga o promulgue el Código debe mantener algún mecanismo para entender en las apelaciones de las personas comprendidas en el Código que aleguen que se ha violado alguna de sus disposiciones.

11. El agente de policía y cualquier otra persona comprendida en el Código que cumpla con el Código merece el apoyo moral y material activo de la comunidad en que cumpla con su deber." 21/

21/ Ibid., párr. 4.

29. Durante un breve debate sobre el fondo de las propuestas, varios participantes insistieron en que se redactara el proyecto de código de ética en términos lo bastante generales como para que todos los países lo aceptaran. Correspondería a cada Gobierno llevar a la práctica sus disposiciones conforme a las necesidades sociales de cada país y dentro del marco de cada sistema político y jurídico. Por otra parte, se hizo notar que la redacción del Código tampoco debía ser tan general que cayera en la ambigüedad y se prestara a confusión 22/.

30. El proyecto presentado por el experto de los Países Bajos despertó el interés de varios participantes, quienes lo consideraron un valioso intento, en general, de formular normas sobre algunas cuestiones importantes, en especial la prohibición de la tortura, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos. Sin embargo, algunos participantes expresaron considerables dudas respecto de las consecuencias que tendría para la disciplina policial el artículo 5 del proyecto de código, que se refiere al deber de desobedecer las órdenes contrarias a los principios básicos descritos en la Declaración Universal.

31. Durante el debate quedó claro que, si bien la mayoría era partidaria de que las Naciones Unidas adoptaran un código internacional de ética policial, había consenso en el sentido de que debía obtenerse más información experta sobre la materia 23/. Por lo tanto, el Congreso decidió:

"Que se pida a la Asamblea General de las Naciones Unidas que establezca un comité de expertos que estudie la cuestión de un código internacional de ética policial y, en el plazo de un año, prepare un nuevo documento que pueda ser examinado por los órganos competentes de las Naciones Unidas. Quizá desee también la Asamblea General examinar la posibilidad de que grupos regionales preparen documentos preliminares con destino a dicho comité de expertos. En la composición de estos grupos deberían estar representados los sistemas jurídicos y culturales de cada región." 24/

C. Algunos otros aspectos de la labor del Congreso que parecen estar estrechamente relacionados con la protección y promoción de los derechos humanos

1. Cambios en las formas y dimensiones de la delincuencia transnacional y nacional

32. En relación con este tema del programa, en el examen de las cuestiones relativas, en particular, a la "violencia interpersonal" y a la "delincuencia vinculada con la migración y con la huida de desastres naturales y hostilidades" intervenía el estudio de problemas de los derechos humanos.

22/ A/CONF.56/L.5/Rev.1, párr. 64.

23/ A/10260, párr. 5

24/ Ibid., párr. 6.

a) Violencia interpersonal

Los participantes convinieron en general 25/ en que deberían iniciarse investigaciones para determinar si existe una relación entre la violencia criminal y, entre otros factores, la discriminación contra grupos étnicos; en que había que prestar atención a los factores que contribuían al comportamiento violento entre los jóvenes, entre otras cosas hasta qué punto participaban realmente en la adopción de las decisiones nacionales importantes, y en que en el sistema de las Naciones Unidas se deberían estudiar propuestas para adoptar una convención internacional en la que se establecieran directrices mínimas acerca del material que los medios de comunicación destinaban a los niños y a los jóvenes, a fin de evitar efectos negativos en las formas de comportamiento.

b) Delincuencia vinculada con la migración y con la huida de desastres naturales y hostilidades

El Congreso llegó entre otras, a las siguientes conclusiones:

- i) Las Naciones Unidas deberían estudiar la posibilidad de ofrecer a los migrantes documentos internacionales de viaje para el período durante el cual su condición fuera objeto de examen por las autoridades nacionales;
- ii) Debería estudiarse la posibilidad de crear un organismo internacional de competencia mundial que se ocupara de los problemas de los trabajadores migrantes y de adoptar una Carta para estos trabajadores;
- iii) Debería reforzarse el mecanismo internacional de asistencia a los refugiados y víctimas de desastres, es decir, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina del Coordinador de Socorro para Casos de Desastres, de las Naciones Unidas, y
- iv) Debería tenerse presente la conveniencia de designar representantes de grupos de trabajadores migrantes en la administración pública, especialmente en los servicios de aplicación de la ley, de las comunidades de los países de acogida en las que estuvieran empleados.

2. Legislación penal, procedimientos judiciales y otras formas de control social en la prevención del delito

33. Algunos participantes sugirieron determinadas reformas de los procedimientos judiciales, en particular, tratar de reducir el número de asuntos objeto de un proceso penal, y reemplazar éste por acciones sociales que fueran más claras para el público, de una duración menos prolongada, de un costo menos elevado y que no provocaran ningún estigma. No obstante, se hizo hincapié en que, al aplicar esas reformas, habría que respetar siempre los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente los derechos de la defensa 26/.

25/ Véase A/CONF.56/L.3/Rev.1, párr. 36.

26/ A/CONF.56/L.4/Rev.1, párrs. 48 y 75, 4).

34. Asimismo se consideró necesario revisar las modalidades de la asistencia jurídica destinada a todos los ciudadanos 27/.
35. Se recomendó a los magistrados que evitaran las situaciones en que se detenía más fácilmente y durante más tiempo antes del juicio a personas de determinadas categorías, como los extranjeros, los inconformistas y los económicamente débiles 28/.
3. Nuevas funciones de la policía y otros organismos de aplicación de la ley, con especial referencia a las cambiantes expectativas y a niveles mínimos de ejecución
36. Además del examen de la cuestión relativa a un Código Internacional de Ética para la Policía, el Congreso llegó, entre otras, a la conclusión de que en la formación de la policía deberían incluirse materias como ética y moral, derechos humanos y ciencias sociales, y que, en la medida de lo posible, debería emplearse a mujeres como agentes de policía en pie de igualdad con los hombres.
4. El tratamiento del delincuente bajo custodia o en la comunidad, con especial referencia a la aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por las Naciones Unidas
37. En el curso del debate sobre el subtema "Factores de la reforma correccional", el Congreso observó cómo cada vez se hacía más hincapié en la protección de los derechos humanos de las personas acusadas o declaradas culpables de un delito 29/. En general, el Congreso consideró que, entre las personas detenidas en espera de ser juzgadas, sólo debían permanecer detenidas en espera de juicio aquellas personas cuyos delitos fuesen de carácter grave o cuya detención preventiva fuera indispensable por razones de seguridad nacional o de protección de la comunidad 30/. Asimismo se sugirió que el arresto domiciliario podía utilizarse como una forma de detención en casos apropiados.
38. El Congreso destacó que, en muchos países, se reconocía que los prisioneros debían continuar disfrutando de los mismos derechos que los demás ciudadanos, con excepción de aquéllos específicamente retirados por disposición de la ley 31/. Se consideró asimismo que las Reglas Mínimas, si eran debidamente aplicadas, garantizaban la protección de los derechos individuales en grado muy considerable.
39. Hubo acuerdo general en que no era necesario proceder a una revisión fundamental de las Reglas Mínimas, si bien convendría que éstas se enmendaran periódicamente

27/ Ibid., párr. 48.

28/ Ibid., párr. 57

29/ A/CONF.56/L.6, párr. 13.

30/ Ibid., párr. 15.

31/ Ibid., párr. 17.

para poder mantenerlas al día 32/. Sin embargo se expresó la opinión de que debían mejorarse los artículos relativos a los procedimientos de queja de los prisioneros, y que los reclusos debían tener la posibilidad de recurrir a una autoridad independiente, como por ejemplo, un ombudsman 33/.

5. Propuestas relativas a los procedimientos para la aplicación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, y participación de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión en esos procedimientos

40. En un documento de trabajo sometido al Congreso por la Secretaría 34/ se proponía una serie de procedimientos y de medidas institucionales con miras a asegurar la aplicación eficaz de las Reglas. Entre las propuestas sometidas a este respecto cabe citar una mayor sistematización de la presentación periódica de informes por los Estados Miembros, la mayor difusión posible del texto de las Reglas, con referencia, entre otras publicaciones, al Anuario de Derechos Humanos y la promoción de un programa de asistencia técnica de las Naciones Unidas. También se destacó la importancia de las funciones del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia en relación con la revisión de las Reglas y su aplicación.

41. Los párrafos 11 a 14 de las propuestas de la Secretaría que pueden interesar en especial a la Comisión de Derechos Humanos, dicen así:

"11. Nada de lo expresado en estos procedimientos debe ser interpretado en sentido de excluir el recurso a cualquier otro medio para hacer cumplir la ley acorde con el derecho internacional o establecido por otros órganos y organismos de las Naciones Unidas para la reparación de las violaciones de los derechos humanos.

12. La Comisión de Derechos Humanos puede, utilizando sus procedimientos usuales, examinar pedidos del Secretario General y de otros órganos y organismos de las Naciones Unidas para considerar quejas individuales relativas a violaciones de las Reglas Mínimas Uniformes. La Comisión, por conducto del Consejo Económico y Social, puede remitir el examen de las quejas al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia y recomendar al Secretario General las respuestas adecuadas.

13. Las alegaciones de graves, repetidas y consecuentes violaciones de las Reglas Mínimas Uniformes deben ser llevadas a la atención del Secretario General con una recomendación para que la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías examinen la situación de acuerdo con los procedimientos de dichos órganos.

32/ A/CONF.56/L.6/Add.1, párrs. 2 y 3.

33/ Ibid., párr. 3.

34/ A/CONF.56/L.6. Véase también A/10260, párr. 12.

14. El Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia debe asistir a la Asamblea General y al Secretario General, cuando lo soliciten, con recomendaciones sobre la formación, metodología e informes de comisiones especiales de encuesta siempre que éstas las cree en relación con asuntos relativos a las Reglas Mínimas Uniformes y a su aplicación y ejecución."

42. El Congreso no pudo examinar detalladamente estas propuestas por falta de tiempo.

II. DISCUSIONES Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EN SU TRIGESIMO PERIODO DE SESIONES EN RELACION CON EL TEMA "TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES EN RELACION CON LA DETENCION Y EL ENCARCELAMIENTO"

43. En sus reuniones 2159ª y 2160ª, 2165ª a 2168ª, y 2172ª, celebradas del 14 al 28 de noviembre de 1975, la Tercera Comisión de la Asamblea General procedió al examen del tema "Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación con la detención y el encarcelamiento".

44. De conformidad con la resolución 3218 (XXIX) de la Asamblea General, la Comisión procedió al examen, en particular, del compendio analítico de la información y las observaciones proporcionadas por los Estados Miembros preparado por el Secretario General (A/10158 y Add.1), así como del informe del Secretario General sobre los trabajos del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, relativo a la cuestión de la elaboración de un Código Internacional de Etica para la Policía, y a la formulación de normas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/10260). Se informó a la Comisión de que la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías había aprobado la resolución 4 (XXVIII) relativa al respeto de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de detención, tras concluir su primer examen anual de la evolución de la situación a este particular, de conformidad con la resolución 7 (XXVII). Además, la Comisión fue informada acerca de la cuestión relativa a la deontología médica en relación con la protección de las personas detenidas o presas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de cuya información formaban parte los textos de la Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial (A/C.3/241), y el documento titulado "Aspectos sanitarios de los maltratos evitables infligidos a presos y detenidos", preparado para el Congreso por la Organización Mundial de la Salud (A/CONF.56/9).

45. Por recomendación de la Tercera Comisión, la Asamblea General adoptó dos resoluciones. Una de ellas, la resolución 3452 (XXX) contenía la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la otra, la resolución 3453 (XXX), titulada "Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en relación con la detención y el encarcelamiento", contenía en el párrafo 2 las peticiones que hacía la Asamblea General a la Comisión de Derechos Humanos para que continuara su labor en esta esfera. Los textos de ambas resoluciones se reproducen en los anexos I y II, respectivamente.

46. En la sección A se examina la labor de la Asamblea General con respecto a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y cuestiones conexas. En la sección B se resumen las discusiones y las decisiones de la Asamblea General concernientes a la cuestión relativa a la elaboración de un Código Internacional de Etica para la Policía.

A. Protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

47. Varios representantes consideraron que desde el vigésimo octavo período de sesiones, cuando se planteó por vez primera esta cuestión en la Asamblea General, las Naciones Unidas habían adoptado medidas positivas para garantizar a los presos protección contra la tortura y los malos tratos. En este sentido se encomiaron, en particular, las medidas adoptadas por la Subcomisión y la labor realizada por el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Sin embargo, hubo consenso en cuanto a subrayar que, pese a todas las recomendaciones de las Naciones Unidas y a todas las condenaciones de la tortura, como negación de los principios de la Carta y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cada vez se recibía más información de que en muchos países se practicaba la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 1/. En este sentido se dijo que, en varios países, parecía que las torturas se infligían sistemáticamente como medio de mantener en el poder a un régimen político y de eliminar las voces disidentes. En consecuencia, la Asamblea reiteró su convencimiento expresado en su resolución 3218 (XXIX), de que se necesitaban nuevos y sostenidos esfuerzos, a nivel nacional e internacional, para poner fin a un comportamiento tan inhumano.

48. La mayor parte de los representantes estimaron que el perfeccionamiento de las normas internacionales que se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos debía constituir una de las tareas importantes de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por eliminar la tortura 2/. No obstante, se expresó la opinión de que quizá no fuera necesario que las Naciones Unidas prosiguieran sus actividades de formulación de normas en esta esfera, de la cual ya se trataba bastante en los documentos existentes, en particular, los artículos 7 y 8 del Pacto 3/.

49. En el curso de los debates sobre la conveniencia de elaborar otras normas internacionales, muchos representantes se refirieron a la información presentada por los Estados Miembros y analizada por el Secretario General en su informe (A/10158 y Add.1). Algunos oradores consideraron que la Comisión de Derechos Humanos, y quizás también el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, deberían examinar estos informes con objeto de estudiar las posibilidades de codificar las diversas leyes contra la tortura 4/. Otro representante manifestó que los artículos 24 a 27 del proyecto de principios sobre el derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso debían ser estudiados más a fondo por los órganos competentes de las Naciones Unidas, en particular, la Comisión de Derechos Humanos. Podría hacerse que estos artículos que, a su juicio, estaban visiblemente influidos por el sistema jurídico anglo-americano, fueran más compatibles con los sistemas jurídicos de los países europeos continentales y con otros sistemas 5/. En la resolución 3453 (XXX) aprobada por la Asamblea se pedía a la Comisión de Derechos Humanos que estudiara el proyecto de principios.

1/ Véase A/C.3/SR.2167, pág. 4.

2/ A/C.3/SR.2160.

3/ A/C.3/SR.2167.

4/ A/C.3/SR.2167.

5/ A/C.3/SR.2160, pág. 7.

50. El debate sobre la cuestión de la fijación de normas se centró sobre todo, no obstante, en el examen del proyecto de Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Cuellos, Inhumanos o Degradantes, presentado por el representante de los Países Bajos a la Tercera Comisión en su 2160ª sesión, celebrada el 14 de noviembre de 1975. Se trataba del texto cuya aprobación por la Asamblea General había recomendado el Congreso 6/.

51. A juicio de varios representantes, el proyecto de declaración constituía una valiosa exposición de principios, aceptables por todos los países y que habían sido cuidadosamente elaborados en el Congreso por expertos versados en todos los sistemas políticos y jurídicos. Evidentemente, los autores de este proyecto habían tenido que enfrentarse con problemas difíciles, como el de la definición del término "tortura", que figura en el artículo I. Aunque la fórmula propuesta quizá no abarcara todos los tipos de tortura, se consideró que presentaba la ventaja de llamar claramente la atención sobre las principales finalidades con las que, de hecho, se infligían las torturas en la actualidad 7/.

52. También se expresó apoyo, en particular, al artículo 3, en el cual se reafirmaba la prohibición de la tortura incluso en circunstancias excepcionales, así como a los artículos que destacaban la necesidad de aplicar a nivel nacional medidas y castigos apropiados 8/.

53. Sin embargo, ciertos representantes consideraron que, si bien la aprobación del proyecto de Declaración constituía un importante paso hacia la abolición de la tortura, el texto no podía considerarse plenamente satisfactorio, especialmente por lo que se refería a garantizar la protección de los presos políticos en regímenes represivos 9/. A este respecto se expresó la opinión de que el artículo 7 debía modificarse para hacer hincapié en la responsabilidad penal en que incurrieran los dirigentes y las autoridades administrativas, no solamente al ordenar, sino también al tolerar la perpetración de torturas o al omitir la prevención o sanción de esas prácticas 10/.

54. En cuanto a los conceptos de responsabilidad penal y complicidad en esta esfera, varios representantes expresaron gran interés por la cuestión de la deontología médica en relación con los derechos humanos de los presos y detenidos, que se mencionaba en el documento preparado para el Congreso por la Organización Mundial de la Salud 11/ y en la Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial relativa a las directrices para los médicos, adoptada en octubre de 1975 12/. Se sugirió que

6/ Véase A/10260, párr. 15.

7/ A/C.3/SR.2160.

8/ A/C.3/SR.2160.

9/ A/C.3/SR.2160.

10/ Ibid., pág. 11.

11/ A/CONF.56/9.

12/ A/C.3/641.

los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas estudiaran los puntos de vista de la Organización Mundial de la Salud con objeto de establecer normas sobre la cuestión 13/.

55. En su 2167ª reunión, celebrada el 24 de noviembre de 1975, después de que la Tercera Comisión aceptara la propuesta formulada por el representante de la República Democrática Alemana de sustituir la palabra "principios" por la palabra "propósitos" en el artículo 2, la Tercera Comisión aprobó por aclamación el proyecto de Declaración con las modificaciones introducidas (véase el anexo I infra).

56. Varios representantes opinaron que la aprobación de la Declaración no sería sino el principio de los esfuerzos de las Naciones Unidas encaminados a erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Algunos oradores recalcaron que, a su entender, hacía falta una convención internacional en la materia 14/. A juicio de varios representantes debía examinarse muy atentamente la aplicación de la Declaración mediante un mecanismo internacional adecuado. A este respecto, se indicó asimismo que debía prestarse también particular atención, dentro del marco del procedimiento establecido por la resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social para la tramitación de las comunicaciones relativas a violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, a las denuncias de torturas practicadas con carácter sistemático 15/.

57. Sin embargo, algunos representantes dudaban que fuera necesario prever nuevas medidas para aplicar normas internacionales pertinentes, en vista de la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de sus disposiciones relativa a la aplicación 16/. En cambio, consideraban que debería instarse a todos los Estados a ratificar este instrumento.

58. La preocupación que suscitaba la aplicación de normas internacionales contra la tortura inspiró, en gran medida, la presentación por Grecia, en nombre de la República Federal de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Filipinas, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Jordania, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Suecia y Venezuela, de un proyecto de resolución en el párrafo 2 de cuya parte dispositiva, tras algunas modificaciones, se pedía a la Comisión de Derechos Humanos que, en su 32º período de sesiones, estudiara "la cuestión de la tortura, así como todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva observancia de la Declaración...". Al mismo tiempo se invitaba a la Comisión de Derechos Humanos a que prosiguiera y ampliara su labor de fijación de normas en esta esfera y elaborase "un conjunto de principios para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, sobre la base ... del Estudio del derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado y del proyecto de principios adjunto a dicho Estudio". Esta fórmula satisfizo a la Comisión, la cual aprobó en la 2172ª reunión el proyecto de resolución en su conjunto sin someterlo a votación. (Véase el anexo II infra.)

13/ A/C.3/SR.2160.

14/ A/C.3/SR.2165.

15/ A/C.3/SR.2160; A/C.3/SR.2165.

16/ A/C.3/SR.2167.

B. Discusiones y decisiones de la Asamblea General sobre la cuestión de un Código Internacional de Ética de la Policía y organismos conexos de aplicación de la ley

59. Como se indicó en la sección B del capítulo I supra, el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, tras examinar los diversos textos que se había propuesto de Código Internacional de Ética de la Policía y organismos conexos de aplicación de la ley, había recomendado "que se pida a la Asamblea General de las Naciones Unidas que establezca un comité de expertos que estudie la cuestión de un Código Internacional de Ética policial y, en el plazo de un año, prepare un nuevo documento que pueda ser examinado por los órganos competentes de las Naciones Unidas".

60. Varios representantes pusieron de relieve el papel clave que debía desempeñar una fuerza de policía respetuosa de la ley, competente y celosa en el mantenimiento de un equilibrio correcto entre las justas necesidades de la comunidad y los derechos humanos de las personas detenidas o encarceladas 17/. No obstante, había informes alarmantes en el sentido de que muchos gobiernos represivos corrompían a la policía para transformarla en su principal medio de aplastar la oposición política con torturas y malos tratos 18/.

61. Por tanto, se convino en general en que las Naciones Unidas debían apoyar plenamente la idea de un código internacional de ética policial e intensificar su labor en esta esfera. Un código de este tipo realzaría en las fuerzas de la policía un sentimiento de respeto de los derechos humanos y podría contribuir en mucho a la protección de las personas detenidas o encarceladas contra la tortura y los malos tratos 19/.

62. Aunque algunos representantes eran partidarios de la creación de un comité de expertos de la Asamblea General que preparase un proyecto de código, como había propuesto el Congreso 20/, otros estimaban que ese procedimiento quizá resultara demasiado ambicioso por el momento 21/. Se consideró que era más práctico confiar esta tarea al Comité sobre Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, ya establecido, que algunos representantes deseaban reforzar, si era necesario, con objeto de llevar a cabo este mandato lo antes posible. En el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución que presentó Grecia, en nombre de una serie de países auspiciadores -el texto que por fin fue aprobado y se convirtió en resolución 3453 (XXX)-, la Asamblea General pedía al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que elabore, sobre la base de, entre otras cosas, las propuestas presentadas al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y

17/ A/C.3/SR.2160.

18/ A/C.3/SR.2167.

19/ A/C.3/SR.2160.

20/ A/C.3/SR.2160.

21/ A/C.3/SR.2167.

Tratamiento del Delincuente..., un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que presente este proyecto de código a la Asamblea General en su trigésimo segundo período de sesiones, por conducto de la Comisión de Desarrollo Social y el Consejo Económico y Social".

63. Quizá se recuerde también que, en el párrafo 2 de la misma resolución, se pedía a la Comisión de Derechos Humanos que estudiara la cuestión de la tortura, así como todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva observancia de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, y para elaborar un conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, sobre la base del Estudio del derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado, y del proyecto de principios adjunto a dicho Estudio.

Anexo I

RESOLUCION 3452 (XXX) DE LA ASAMBLEA GENERAL

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

La Asamblea General,

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de la dignidad inherente y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,

Considerando que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana,

Considerando asimismo la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 1/ y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2/, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Aprueba la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo texto se adjunta a la presente resolución, como norma de orientación para todos los Estados y demás entidades que ejerzan un poder efectivo.

ANEXO

Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Artículo 1

1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura las penas o

1/ Resolución 217 A (III).

2/ Resolución 2200 A (XXI), anexo.

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante.

Artículo 2

Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Artículo 3

Ningún Estado permitirá o tolerará la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 4

Todo Estado tomará, de conformidad con las disposiciones de la presente Declaración, medidas efectivas para impedir que se practiquen dentro de su jurisdicción torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 5

En el adiestramiento de la policía y otros funcionarios públicos responsables de las personas privadas de su libertad, se asegurará que se tenga plenamente en cuenta la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta prohibición se incluirá asimismo, en su caso, en las normas o instrucciones generales que se publiquen en relación con los deberes y funciones de cualquier encargado de la custodia o trato de dichas personas.

Artículo 6

Todo Estado examinará periódicamente los métodos de interrogatorio y las disposiciones para la custodia y trato de las personas privadas de su libertad en su territorio, a fin de prevenir todo caso de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 7

Todo Estado asegurará que todos los actos de tortura definidos en el artículo 1 constituyen delitos conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplicará a los actos que constituyen participación, complicidad, incitación o tentativa para cometer tortura.

Artículo 8

Toda persona que alegue que ha sido sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por un funcionario público o a instigación del mismo, tendrá derecho a que su caso sea examinado imparcialmente por las autoridades competentes del Estado interesado.

Artículo 9

Siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura tal como se define en el artículo 1, las autoridades competentes del Estado interesado procederán de oficio y con presteza a una investigación imparcial.

Artículo 10

Si de la investigación a que se refieren los artículos 8 ó 9 se llega a la conclusión de que parece haberse cometido un acto de tortura tal como se define en el artículo 1, se incoará un procedimiento penal contra el supuesto culpable o culpables de conformidad con la legislación nacional. Si se considera fundada una alegación de otras formas de trato o penas crueles, inhumanos o degradantes, el supuesto culpable o culpables serán sometidos a procedimientos penales, disciplinarios u otros procedimientos, adecuados.

Artículo 11

Cuando se demuestre que un acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes han sido cometidos por un funcionario público, o a instigación de éste, se concederá a la víctima reparación e indemnización, de conformidad con la legislación nacional.

Artículo 12

Ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes podrá ser invocada como prueba contra la persona involucrada ni contra ninguna otra persona en ningún procedimiento.

Anexo II

RESOLUCION 3453 (XXX) DE LA ASAMBLEA GENERAL

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
en relación con la detención y el encarcelamiento

La Asamblea General,

Reafirmando, el rechazo, formulado en sus resoluciones 3059 (XXVIII) de 2 de noviembre de 1973, y 3218 (XXIX), de 16 de noviembre de 1974, de todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Reiterando su convicción, expresada en la resolución 3218 (XXIX), de que, a causa del aumento del número de informes alarmantes sobre torturas, se necesitan nuevos y sostenidos esfuerzos para proteger en todas las circunstancias el derecho humano básico a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

Acogiendo con beneplácito la resolución 4 (XXVIII) de 10 de septiembre de 1975, aprobada por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

Habiendo examinado el informe del Secretario General 3/ que contiene un compendio analítico de la información recibida conforme al párrafo 1 de su resolución 3218 (XXIX),

Recordando su petición al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de que considerara las medidas que habrían de adoptarse para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y de que informara al respecto a la Asamblea General en su trigésimo período de sesiones,

Tomando nota del documento de trabajo titulado "Aspectos sanitarios de los maltratos evitables infligidos a presos y detenidos" 4/, presentado por la Organización Mundial de la Salud al Quinto Congreso de las Naciones Unidas,

Tomando nota con aprecio del informe del Secretario General 5/,

Teniendo en cuenta que el Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente expresó la opinión de que, acerca de la cuestión de un Código Internacional de Ética Policial, debía obtenerse más información experta,

3/ A/10158 y Corr.1 y Add.1.

4/ A/CONF.56/9.

5/ A/10260.

Habiendo aprobado la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que figura como anexo de la resolución _____ (XXX) de _____ de _____,

Considerando que es necesario seguir realizando esfuerzos en el plano internacional a fin de asegurar la protección adecuada de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

1. Expresa su aprecio al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente por la preparación de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

2. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que, en su 32º período de sesiones, estudie la cuestión de la tortura, así como todas las medidas necesarias para

a) Asegurar la efectiva observancia de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y

b) Elaborar un conjunto de principios para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, sobre la base del Estudio del derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado y del proyecto de principios adjunto a dicho Estudio 6/;

3. Pide además al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que elabore, sobre la base de, entre otras cosas, las propuestas presentadas al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y las conclusiones a que se llegó en éste, un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que presente este proyecto de código a la Asamblea General en su trigésimo segundo período de sesiones por conducto de la Comisión de Desarrollo Social y el Consejo Económico y Social;

4. Invita a la Organización Mundial de la Salud a que preste nueva atención al estudio y elaboración de los principios de ética médica que sean pertinentes a la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

5. Decide incluir en el programa provisional de su trigésimo primer período de sesiones un tema titulado "La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" con objeto de examinar los progresos logrados en relación con la presente resolución.